

# **CONTRIBUCIÓN PROYECTO DIRECTRICES SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 169, 170 Y 171 DEL REGLAMENTO DE LA OCM ÚNICA.**

## **1. ANTECEDENTES**

No es nueva la preocupación de las autoridades nacionales y comunitarias de mejorar la posición negociadora de los agricultores y ganaderos en la cadena agroalimentaria. La situación en la que se encuentra el sector agrario en la mayor parte de la UE se debe principalmente a los siguientes factores:

1. Las sucesivas reformas de la PAC están eliminando los sistemas de gestión de mercados que tenían las OCM, como intervención pública, almacenamientos privados, ayudas a retiradas de productos, ayudas a la utilización de productos agrarios por la industria, ayudas públicas para la utilización de productos agrarios por los sectores más desfavorecidos,... Especialmente a partir de la Agenda 2000 se ha instaurado la idea de que la mejor política es la ausencia de política en la gestión de los mercados, que es mejor no intervenir y que sean los propios mercados los que se autorregulen.
2. La creciente liberalización del comercio mundial, con un dominio de éste por parte de las grandes multinacionales.
3. La falta de regulación internacional de los mercados de materias primas agrarias que ha permitido que en los últimos años se especule abiertamente con estos productos.
4. El proceso continuado de concentración de la distribución. Como ejemplo, podemos decir que en España, el 81,9% de las compras de alimentos se realizan a través de los llamados “canales dinámicos”, es decir, la distribución en autoservicio (super, híper y discount), y solamente el 2,7% en la tienda tradicional y el 11,2% en tiendas especializadas. Los datos nos indican que cada vez más, las compras de alimentos por parte del consumidor final se concentran y organizan alrededor de la Gran Distribución Alimentaria
5. Las autoridades de la Competencia de España, adoptaron una posición absolutamente restrictiva en la interpretación del derecho de competencia comunitario. Se ha situado en el furgón de cola, de ahí el informe de la CNC sobre Competencia y sector Alimentario. En él se indica “De acuerdo con los precedentes comunitarios, la normativa comunitaria restringe en gran medida la posibilidad de que no se apliquen las normas de competencia a acuerdos entre operadores del sector agroalimentario, estableciendo unas condiciones muy exigentes para ello”.

Ante esta situación, la reforma de la PAC introdujo dentro de la OCM única, una serie de artículos, que estaban destinados a contrarrestar la situación descrita, a pesar de las tesis más liberalizadoras defendidas tanto por los servicios de la Comisión Europea, como de varios Estados Miembros.

## 2. OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTRICES.

La lectura del proyecto de directrices publicado por la Comisión Europea, supone la constatación de aquello que la Comisión Europea ha venido defendiendo desde el inicio del proceso de reforma de la PAC:

**“NO ES NECESARIO REFORZAR LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS”**

Solo de esta manera se entiende que los servicios de la Comisión intenten cambiar el sentido del acuerdo comunitario, legislando a través de estas directrices y dificultando aún más la difícil tarea de reequilibrar la cadena agroalimentaria.

El proyecto de directrices traslada a los agricultores y ganaderos una gran incertidumbre sobre la aplicación de las excepciones a la competencia, y no amplía las posibilidades que en este momento cuentan ya los agricultores y ganaderos para poder defender su posición en el mercado.

La Comisión Europea debe ser consciente que la situación de desequilibrio que vive la cadena en este momento, es un grave peligro para el medio y largo plazo, y que no debemos descartar graves problemas en el mercado europeo de producción de alimentos.

Conceptos tan importantes que se tratan en el proyecto de directrices como el **“mercado relevante”** o la **“eficiencia significativa”**, generan una enorme incertidumbre en los diferentes sectores implicados. La interpretación que los servicios de la Comisión hacen sobre ambos, implica que en la práctica ninguna organización de productores, busque nuevas estrategias en beneficio de los agricultores o ganaderos, por miedo a las represalias de los servicios de competencia.

Si realmente se pretende dotar a los agricultores y ganaderos de medidas para reequilibrar la cadena agroalimentaria, las directrices comunitarias deberían ser mucho más flexibles permitiendo al sector productor mantener negociaciones comerciales de tú a tú, con la industria y la distribución alimentarias.

El proyecto de directrices en lugar de buscar un mayor poder de negociación del sector más débil de la cadena lo que va a conseguir es que se cree tales incertidumbres y trabas que se cierre de hecho una oportunidad que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo apoyaron.

Se puede dar la circunstancia que en España una cooperativa, que ahora puede y de hecho negocia colectivamente el precio de los productos de sus socios si se constituyera en OP pudiera tener problemas con la Comisión por, por ejemplo, no demostrar suficientemente la eficiencia significativa de la construcción de un cebadero comunitario, o una planta de embotellado de aceite de oliva o un centro de acondicionamiento de semillas. De tal forma que decisiones que como cooperativa sólo tienen que rendirse cuentas ante los socios y la asamblea general, como OP tendría que

además explicarse ante la Comisión o los servicios de competencia nacional. Y todo ello sin ninguna ventaja para el socio.

Por tanto pensamos que esta iniciativa de la comisión adultera total y radicalmente el espíritu del acuerdo político del Trílogo. De tal forma que solicitamos se renuncie a este camino y se permita y favorezca la constitución de organizaciones de productores que agrupando producción sean capaces de mejorar la posición negociadora de los agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria.